

¿QUÉ PRETENDEN?

En los días siguientes a la elección presidencial de julio pasado AMLO y su equipo difundieron a los cuatro vientos sus intenciones de preservar la estabilidad económica, a la par de acomodar una agenda social que distinguiera a su gobierno de los anteriores.

Poco a poco el discurso y los hechos entraron en conflicto y se han emprendido acciones económicas cada vez más descabelladas.

Primero fue la reducción de sueldos a los funcionarios públicos de alto nivel que disminuirán sus percepciones entre 18 y 37 por ciento el año entrante con relación a 2018. Es una medida de austeridad mal entendida que ha generado una desbandada de personas que conocen cómo opera un gobierno, a favor de un grupo de aprendices que poco saben de eso. Los propios colaboradores de AMLO confiesan, en privado, que están aterrados de llegar a sus nuevos puestos sin el personal mínimo para desarrollar sus tareas.

Siguió la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que en esencia significa retrasar el desarrollo del transporte aéreo del país por lo menos una década y tirar a la basura el avance de 36 por ciento de una mega-obra. El costo directo es de miles de millones de pesos, como si sobrara dinero de los contribuyentes en las arcas públicas.

Envalentonados, los legisladores de Morena y sus partidos satélite han lanzado múltiples iniciativas y cambios ley: una para reducir las comisiones bancarias; otra para limitar las concesiones mineras; dos más para cambiar el mandato al Banco de México, entendiéndose para forzarlo a prestarle dinero al gobierno; una más para que el Ejecutivo pueda intervenir las tarifas eléctricas, en franca violación a la autonomía del órgano regulador, en este caso la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y finalmente otra, que al parecer retiraron, para nacionalizar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), aunque el daño de sus intenciones quedó patente.

Los costos de esta embestida están a la vista: de mediados de octubre a la fecha el peso se ha devaluado 9 por ciento; las tasas de interés de los bonos gubernamentales de largo plazo se ha incrementado 15 por ciento, porcentaje similar al que ha caído la bolsa de valores; la expectativa de inflación de 2019 se ha elevado y la del crecimiento del PIB se ha disminuido, ambas moderadamente por el momento aunque en sentido contrario a lo deseable.

Ningún otro gobierno en la historia moderna de México había destruido tanto valor, en tan poco tiempo, antes de iniciar formalmente su gestión. De continuar así, dentro de seis años la economía mexicana será un esqueleto.

A los adversarios de la economía de mercado podría parecerles que el deterioro de estas variables financieras afecta solo a los privilegiados, pero no es así. El daño puede extenderse a todos los mexicanos, especialmente a los más desposeídos, cuando el rompimiento financiero permea al resto de la economía.

Los estropicios hasta ahora son síntoma de desconfianza y si esta se amplía podría ser muy costosa hacia futuro, en la medida que la actividad productiva privada se paralice o, peor aún, se achique.

La producción de bienes y servicios generada por los ciudadanos es cuatro veces mayor a la originada por el gobierno; la inversión productiva privada, en plantas, equipos y construcción, es cuatro veces más grande que la gubernamental y, resultado de esto, el empleo creado por la iniciativa privada es casi quince veces superior al del sector público. No hay forma que el país florezca económicamente sin la participación de sus ciudadanos y de algunos extranjeros, así como de sus empresarios de todos los tamaños, los micro, los medianos y los grandes.

El gobierno que está a días de comenzar su gestión parece más empeñado en ahuyentar a la clase empresarial que en atraerla. De seguir este rumbo la economía entrará en declive, obstaculizando las posibilidades de progreso de los hogares mexicanos.

El poder conferido en las urnas a AMLO es para construir, no para demoler. ¿Qué pretenden?

Socio fundador de GEA Grupo de Economistas y Asociados